

AGENDA CIUDADANA

LA POLITICA DE LA FUERZA

Lorenzo Meyer

Fantasma.- Un fantasma recorre toda la historia política de México, en particular la del México independiente: el |lde la violencia, de la política como fuerza y de la fuerza. Fue por exorcizar a ese fantasma, que muchos justificaron tanto la *pax porfirica* del siglo pasado como la *pax priista* del actual. Sin embargo, ambas resultaron a fin de cuentas arreglos con problemas estructurales y hoy el fantasma amenaza con volver a materializarse entre nosotros.

Ya lo advirtió Max Weber: en el fondo, la política, cualquier política, incluso la más altruista, es un asunto de fuerza, pues el ejercicio del poder dentro del marco del Estado nacional no puede sustraerse a la esencia de éste; y esa esencia es precisamente el monopolio de la violencia legítima. En el caso del México de la segunda mitad de este siglo, y salvo espectaculares excepciones, ese aspecto brutal de la vida colectiva se había mantenido discretamente oculto, pues se suponía que precisamente la terrible Revolución Mexicana se había hecho justamente para crear una institucionalidad que, de tan popular y legítima, disminuyera o de plano eliminara la posibilidad de volver a vivir la política como violencia, como imposición.

Sin embargo, resulta que finalmente ese no fue el caso y en los tiempos que corren se está volviendo a vivir la política --y la vida cotidiana misma-- como un asunto de fuerza, de violencia. Es claro que se trata apenas de una tendencia, que el fantasma

aún no se materializa plenamente, pero ya ha empezado a adquirir consistencia y conviene tomar conciencia del hecho para hacer todo lo que esté a nuestro alcance por revertirlo.

Otro que Llega con la Espada Desenvainada.- De acuerdo con la llamada *Declaración del Norte* --una escueta cuartilla--, un nuevo actor acaba de ingresar al escenario político directamente por la vía de las armas: el Ejército Revolucionario de Insurgencia Popular (ERIP). No sabemos si el ERIP realmente existe ni cual es su fuerza, pero según los primeros análisis, la organización es real (ya el subcomandante Marcos nos había advertido que había varios grupos insurgentes en diversas partes del país) y que probablemente tiene su zona de operaciones en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Durango y Baja California (*El Financiero*, 24 de noviembre). Por las demandas enumeradas en su manifiesto, el centro del agravio de los nuevos insurgentes sería el agudo problema de la sociedad agraria --falta de tierras, de crédito, de empleo, de precios justos--, aunque afirma contar también entre sus filas con elementos urbanos, incluidos comerciantes y "pequeños empresarios nacionalistas". Al igual que los dos movimientos insurgentes ya existentes y operando --el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR)--, el ERIP eleva como razón fundamental, moral, para recurrir a la fuerza, la naturaleza ilegítima del gobierno actual, al que califica de usurpador por haber llegado al poder por la vía de elecciones "fraudulentas y basadas en una pequeña minoría". La larga historia de elecciones

falseadas o sin contenido, le está pasando la factura al régimen e, indirectamente, a todos nosotros.

Hasta hoy el ERIP no ha efectuado ninguna acción armada, pero si finalmente se comprueba su implantación en los estados enunciados, entonces el mapa de la política violenta se habrá expandido al norte del país y este fenómeno no ya será sólo un problema regional --del sur rural, indígena y atrasado-- como se insistió en algunos análisis, sino un fenómeno nacional que concierne a todos, incluso a los que se han querido mantener al margen.

El Ejército.-- La insurgencia armada, aunada a la insistencia en resolver el problema del narcotráfico por la vía del ejército --insistencia que surgió de los Estados Unidos a raíz de la inesperada y agresiva "Operación Intercepción" de 1969--, han hecho que las fuerzas armadas mexicanas se desplacen de su tradicional posición en las márgenes del sistema de poder, a una zona más cerca al centro de las decisiones, hecho que no puede ser visto con indiferencia por quienes tengan un mínimo sentido de la historia antigua o reciente de México y de América Latina.

Para darle algún contenido a la conclusión anterior, vienen al caso algunos indicadores, que si bien aún no son en si mismos alarmantes, cuando se les considera en el contexto del enorme fracaso de la economía, de las fallas de las instituciones políticas civiles, de la inseguridad y de la creciente polarización de la estructura social --la terrible desigualdad en la distribución de los bienes y servicios producidos por la sociedad mexicana--, entonces adquieren otra dimensión. De

acuerdo con las últimas cifras publicadas por el *International Institute for Strategic Studies* en *The Military Balance, 1996/97* (Londres: Oxford University Press, 1996, p.309), en 1985 el conjunto de las fuerzas armadas de México sumaban 129,100 efectivos, pero para 1995 ya habían aumentado a 175 mil; con el incremento de plazas aprobado en 1996, el total ya debe de haber sobrepasado los 180 mil. En América Latina sólo Brasil tiene un ejército numéricamente superior al mexicano (295 mil hombres), pero si se hace el cálculo en términos de población, resulta que mientras en Brasil hay un soldado por cada 529 habitantes, en México la proporción el año pasado ya era de uno por cada 520. El costo del aparato militar mexicano, y según la misma fuente, pasó de 1,695 millones de dólares en 1985 a 2,676 en 1995 y va en aumento.

El Círculo Vicioso.- Tomando como referencia el gasto militar en términos *per capita* --treinta dólares en 1995--, el de México se mantiene ligeramente por abajo del de Brasil y es varias veces menor que el de varios países latinoamericanos con una tradición militar o militarista, como es el caso de Chile, Argentina o Uruguay, pero va en aumento. En cualquier caso, y dados los enormes y crecientes problemas sociales, el destinar casi tres mil millones de dólares al ejército --en su mejor momento, el famoso programa de Solidaridad para aliviar la miseria absorbió un monto equivalente-- no pareciera ser la mejor manera de emplear recursos muy escasos. Ahora bien, es precisamente por esos enormes y crecientes problemas sociales --el tradicional caldo de cultivo de la insurgencia-- aunados a la

aparente imposibilidad de dar forma a un régimen político realmente moderno, que el gobierno se ha decidido a incrementar la partida para el ejército y la armada. Es el precio que todos pagamos por la defensa de grupos e instituciones que ya no están a la altura de los tiempos. Estamos entrando, pues, en un claro y desafortunado círculo vicioso que, si no se corta rápido, puede adquirir una inercia que hará cada vez más difícil retornar a la práctica de la política no como el arte de la guerra sino el de la negociación y el compromiso.

La Lección de la Historia.- El ejército mexicano nació en el siglo XVIII; su misión, se pensó entonces, tenía poco que ver con asuntos internos y mucho con la política internacional, pues su objetivo era la defensa del reino frente a las amenazas de los enemigos de España: los ingleses (no era una idea absurda, como lo mostraron los ataques británicos a Buenos Aires). Desafortunadamente el estallido de la rebelión de independencia le dio al flamante ejército una terrible misión interna: la de restaurar a sangre y fuego la autoridad del rey, lo que casi consiguió a partir de la derrota de Francisco Javier Mina en 1817. En el proceso, esa fuerza armada --sus generales y jefes--, adquirieron un poder político --y una propensión a imponer su voluntad y apropiarse de bienes ajenos-- que volvió a la autoridad civil bastante inútil y dependiente de la buena voluntad de los señores de la guerra. No es gratuito que los nombres que sintetizan la caótica vida política del México de la primera mitad del siglo XIX sean básicamente de militares

profesionales o de gente de armas: Iturbide, Santa Anna, Juan N. Alvarez y muchas otras figuras similares.

Para poder construir la paz y hacer que fraguara la estabilidad en un México de guerra civil, pronunciamientos, revueltas, bandidaje y saqueos, Benito Juárez primero y el general Porfirio Díaz después, tuvieron que luchar por disminuir drásticamente los efectivos y papel de las fuerzas armadas. Díaz mismo llegó al poder por la vía de las armas, pero para evitar que alguien más le desafiara imitándole, redujo al mínimo la institución en la que él mismo había hecho su carrera: el ejército.

En el siglo XX, la Revolución Mexicana vio nacer y morir el primer experimento real de militarismo en el país (el gobierno de Victoriano Huerta) y entre 1920 y 1946, militares no profesionales al mando de un nuevo ejército, fueron el centro vital de la política mexicana. Fue la nueva institucionalización, más la ausencia de un enemigo externo creíble, lo que hizo que el ejército mexicano se subordinara a la autoridad civil, se acomodara tranquilamente en la parte trasera del escenario político nacional y que, a diferencia de lo sucedido en otros países latinoamericanos, sólo de tarde en tarde saliera de sus cuarteles para resolverle problemas desagradables a la élite civil.

El Presente y el Futuro.- Lo que explica la salida del ejército de sus cuarteles y su despliegue a lo largo y ancho del país es la hondura de la crisis política y económica que hoy vive México. Por tanto, hay que resolver esa doble crisis antes de que

el paso del tiempo y su nueva situación, haga que cambie la actitud y mentalidad de los mandos militares y volvamos a épocas pasadas. Como el modificar las tendencias económicas va a tomar mucho tiempo, entonces hay que actuar sobre la materia donde la voluntad puede tener un impacto más inmediato: la política.

Es necesario resolver ya por la vía política los levantamientos insurgentes y dar forma a una policía realmente digna de tal nombre para combatir el narcotráfico a fin de poder retirar de esa complicada tarea al ejército y a la armada sin importar que Estados Unidos lo apruebe o no.

En conclusión, el gobierno, los insurgentes y la sociedad a través de sus organizaciones y medios de expresión, debemos empeñarnos en civilizar la naturaleza de la política en un doble sentido: hacer de las reglas del juego del poder unas menos brutales, donde ya no se permita la existencia de ganadores y perdedores permanentes, una donde haya adversarios pero ya no enemigos a muerte; en segundo lugar, hay que civilizar la política volviéndola a hacer el campo de los civiles y regresando al ejército a los cuarteles.